

TRABAJO Y POBREZA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS

J. Eduardo López Ahumada*

SUMARIO: 1. Introducción. 2. La relevancia del sistema universal de protección de los Derechos Humanos desde la perspectiva del trabajo. 3. La conexión del derecho al trabajo digno con la protección de los derechos fundamentales. 4. La promoción del trabajo digno desde la OIT en clave de derechos humanos. 5. Trabajo digno como derecho humano y como objetivo de desarrollo sostenible. 6. La necesaria atención a la pobreza desde el fomento de los derechos humanos.

1. Introducción

El centro de gravedad de la protección del derecho al trabajo desde el sistema de Derechos Humanos se basa en el respeto de la dignidad de la persona. Estamos, pues, ante una tutela de la persona en el desarrollo de su actividad productiva, que se presenta inescindible de su desarrollo personal. Ello nos conduce irremediablemente a la noción de derecho al trabajo digno, es decir, al necesario fomento del trabajo con derechos y con protección social. El derecho al trabajo digno se manifiesta evidentemente como un derecho fundamental, conectado con la protección de la persona por encima del trabajo. En este sentido, el derecho al trabajo se vincula necesariamente a la propia dignidad humana, faceta esencial para la misma realización de los derechos humanos.

Estamos ciertamente ante uno de los temas centrales de la sociedad en la que vivimos, que se encuentra sumida en un proceso complejo de transformación y de cambio social.

* Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Alcalá e investigador principal de la línea de investigación en Relaciones Laborales y Protección Social del IELAT (Madrid, España).

Por ello, hay que recordar la virtualidad de la dimensión tuitiva del Derecho del Trabajo, porque precisamente es uno de los aspectos que insistentemente se intenta desactivar. No debemos olvidar que esta materia coincide originariamente con el propio nacimiento del Derecho del Trabajo, como legislación especial protectora, que permitió la transición de un Estado liberal insensible socialmente a finales de Siglo XIX hacia un Estado de contenido social, basado en la propia democracia general. Es decir, un sistema democrático que se proyecta irremediabilmente en una democracia efectiva en el ámbito de las relaciones laborales.

2. La relevancia del sistema universal de protección de los Derechos Humanos desde la perspectiva del trabajo

En el sistema universal de protección de los Derechos Humanos debemos referirnos necesariamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Con carácter general, el art. 23 de la Declaración Universal contempla expresamente el derecho de toda persona al trabajo y a la libre elección del mismo, contando con una protección contra el desempleo y a un salario igual por un trabajo igual. Las personas tienen derecho a disfrutar de condiciones equitativas y satisfactorias en el trabajo, a una remuneración suficiente que garantice al trabajador y a su familia una vida digna, a través de dicho medio de sustento. Correlativamente a este precepto, el art. 25 prevé el derecho al bienestar, a la salud y, ligado al trabajo, el derecho a contar con una protección social a través de la Seguridad Social. Se produce, pues, el blindaje del trabajo protegido con derechos, esencial para el desarrollo de un proyecto de vida en sociedad.

Esta protección es fundamental en la medida que dicha protección se presenta como un instrumento de tutela, asegurando medios de subsistencia por circunstancias independientes de la voluntad de las personas. Dichas reglas permiten el desarrollo vital en supuestos de carencia de renta, como ocurre ante la contingencia del desempleo, la enfermedad, la viudedad, la incapacidad y la vejez. Y, finalmente, ligado a la propia condición humana y a su desarrollo en sociedad, el mismo art. 24 contempla el derecho necesario al descanso, haciendo efectivo el disfrute del tiempo libre. Se trata

efectivamente de un aspecto únicamente posible si se produce la consiguiente limitación de la jornada de trabajo y el derecho a las vacaciones periódicas remuneradas.

El Pacto de Derecho Civiles y Políticos contempla la prohibición de la esclavitud, así como otras formas de trabajo forzoso, como sucede con las nuevas formas de servidumbre, la trata de personas, así como cualquier otra fórmula omnicomprendiva del trabajo impuesto. Se prohíbe, pues, cualquier tipo de actividad realizada en contra de la voluntad de la persona. Precisamente, este derecho básico y fundamental, que pudiera parecer que actualmente es una regulación anacrónica y propia de otro tiempo, cobra hoy día mucho más significado ante las nuevas formas de explotación de las personas en el trabajo. Este fenómeno se produce en todas las partes del mundo, con mayor o menor intensidad. Esta declaración es sumamente importante en la medida que se prohíbe taxativamente cualquier tipo de situación que vulnere el derecho a elegir libremente el trabajo o cuando se fuerce el acceso al trabajo y su mantenimiento. Sin duda, se trata de decisiones que exclusivamente deben basarse en una decisión libre y estrictamente personal.

El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contempla en su artículo 6 el derecho a trabajar, como derecho de cualquier persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente aceptado. Asimismo, se declara que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento, mediante la orientación y la formación técnico profesional. Se trata de un aspecto esencial para conseguir el desarrollo económico, social y cultural constante, que deberá orientarse a la consecución de la plena ocupación. Sin duda, esta configuración se presenta como un aspecto clave para garantizar las libertades políticas y económicas fundamentales de las personas.

En este mismo sentido, el art. 7 del Pacto reconoce el derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, que garanticen una remuneración que proporcione, como mínimo, un salario igual por un trabajo de igual valor, sin ningún tipo de diferencia y que permita condiciones dignas de vida. Asimismo, se contempla la necesidad de disfrutar de seguridad e higiene en el trabajo, oportunidades de promoción y ascenso, disfrute del tiempo libre, del descanso remunerado y de las vacaciones periódicas. Igualmente, el art. 8 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé el derecho de las personas a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, asegurándose



asimismo el derecho de los sindicatos a desarrollar sus acciones sin obstáculos y sin limitaciones externas.

Con carácter general, debemos destacar, la relevancia del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de cuya observancia depende la vigilancia de su cumplimiento por parte de los Estados en virtud del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La labor del Comité se muestra con el paso de los años esencial en el objetivo de formular las observaciones que precisen el contenido normativo del derecho. El Comité contempla, pues, de forma específica las obligaciones de los poderes públicos relativos al cumplimiento del derecho al trabajo. En este trabajo estamos haciendo especial hincapié en la observación general núm. 18, que desarrolló el art. 6 del Pacto en relación al derecho al trabajo. Esta Observación fue formulada el 24 de noviembre de 2005. Sin duda, se presenta como un referente idóneo para analizar la estrecha conexión existente entre el Derecho del Trabajo y el sistema internacional de Derechos Humanos.

En Latinoamérica es preciso referirnos a la proyección del sistema regional interamericano, que reconoce la protección del derecho al trabajo. En este sentido, la proclamación del derecho al trabajo se encuentra en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que contempla el derecho al trabajo y a una remuneración justa, que permita un nivel de vida adecuado para el trabajador y su familia. Estamos refiriéndonos a un texto internacional de suma importancia, aprobado en Bogotá en 1948, en el ámbito de la IX Conferencia Internacional Americana. De igual modo, debemos referirnos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en la conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos. Posteriormente, dicha Convención sería ratificada en Colombia el 28 de mayo de 1973. El Pacto de San José de Costa Rica prohíbe la esclavitud y la servidumbre en todas sus formas y proscribe, consiguientemente, el trabajo forzoso u obligatorio. Asimismo, el Protocolo adicional a dicha Convención –Protocolo de San Salvador–, contempla el derecho de todas las personas al trabajo y a la garantía de su libre ejercicio en condiciones justas, equitativas y satisfactorias. Asimismo, el Protocolo prevé la obligación de los Estados de adoptar medidas que garanticen la plena efectividad del derecho, especialmente frente a los



grupos especialmente vulnerables. Igualmente, el Protocolo prevé la necesaria observancia de los derechos sindicales, así como el derecho a la seguridad social.

3. La conexión del derecho al trabajo digno con la protección de los derechos fundamentales

El derecho al trabajo digno se manifiesta como un derecho fundamental conectado con la protección de la persona por encima del trabajo. En este sentido, el derecho del trabajo se vincula necesariamente a la propia dignidad humana, faceta esencial para la propia realización de los derechos humanos. Y como decimos, la protección gravita de forma general respecto de cualquier actividad productiva. El concepto de trabajo es amplio a efectos de mayor protección jurídica, que ampara cualquier labor que permita el desarrollo del individuo. Por otro lado, esta protección se encuentra igualmente relacionada con la faceta social del trabajo, siendo la protección misma un reflejo de la solidaridad social. El trabajo se refiere a cualquier actividad que sea útil para la persona y para la sociedad, permitiéndole su supervivencia mediante la satisfacción de las necesidades más básicas del individuo y su familia. Nos referimos a un trabajo que se desarrolle como vía para conseguir el ansiado bienestar derivado de su desarrollo personal y social en la comunidad.

La protección gravita de forma general respecto de cualquier actividad productiva, puesto que el concepto de trabajo es amplio a efectos de mayor protección jurídica. El derecho humano al trabajo se concibe como un derecho subjetivo, que no puede ser interpretado como un derecho a un determinado trabajo. Esta protección deriva del propio sistema de protección internacional basado en la persona, y desde la perspectiva nacional, con la propia configuración democrática del Derecho. Con todo, tampoco el derecho al trabajo debe entenderse como un derecho incondicional, sino que se trata de un derecho a tener oportunidades de empleo.

Ciertamente, debemos destacar que la protección del trabajo digno no se configura como un modelo diseñado exclusivamente para un sector de la población que ha accedido privilegiadamente al mismo. Dicha protección tiene evidentemente una vis atractiva y expansiva, en el sentido de que no solamente la actividad laboral



subordinada está protegida por el derecho fundamental al trabajo. Igualmente, el trabajo independiente y no subordinado, ejercicio libremente o de forma impuesta por la realidad, está llamado a ser tutelado y protegido por los Estados nacionales. Por tanto, el trabajo ejercido independientemente por el individuo está comprendido asimismo en el núcleo esencial del derecho al trabajo. Es decir, lo importante realmente es la persona y su dignidad, más que el tipo de protección que se desarrolle. Los principales textos internacionales de derechos humanos protegen el derecho al trabajo y dichos instrumentos no se refieren a un tipo específico de trabajo, sino a la persona y a su actividad productiva, con independencia de la naturaleza jurídica que ésta revista. Esta afirmación es sumamente importante, puesto que lo importante no es la relación jurídica que se entable, ni si quiera sería relevante el tipo de regulación o la ausencia de la misma en un país determinado. Esta tutela expansiva de la actividad humana permitiría proteger a las personas que prestan sus servicios en el ámbito de la economía informal y del trabajo no declarado.

4. La promoción del trabajo digno desde la OIT en clave de derechos humanos

En los últimos años se ha producido un avance importante en la consideración del trabajo como derecho humano desde la propia OIT. Sin duda, ello enlaza con el concepto de trabajo decente, elaborado a lo largo de los años por la OIT. Esta labor está en la propia esencia de la Declaración de la OIT, relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998. En virtud de dicha Declaración, todos los Estados miembros, a pesar de no haber ratificado los convenios reconocidos como fundamentales, tienen el compromiso internacional que se deriva de su pertenencia a la OIT. Los Estados deberán respetar, promover y de hacer realidad la protección del derecho al trabajo, observando la propia Constitución de la OIT. En este sentido, los principios relativos al trabajo decente y a los derechos fundamentales en el trabajo son la libertad de asociación y la libertad sindical, así como el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Ciertamente, este objetivo de un trabajo como derecho humano implica la necesidad de orientar la actividad productiva



de las personas, teniendo en cuenta los principios y derechos del trabajo, tales como la necesidad del fomento y la creación de empleo, la garantía de la protección social y la observancia de la máxima de la igualdad y la no discriminación en el acceso y en el desarrollo de las relaciones laborales. Estamos en presencia de un derecho humano al trabajo, que deberá basarse en la promoción por parte de los Estados del pleno empleo productivo y libremente elegido.

Precisamente, la OIT tiene entre sus fines primordiales la búsqueda de las transformaciones precisas para asegurar un trabajo decente para los hombres y las mujeres en el mundo. Estamos hablando de un trabajo digno que asegure la suficiencia del trabajo en el desarrollo vital de la persona y que permita tener el pleno acceso a las oportunidades de obtención de los ingresos para poder vivir. En este sentido, debemos destacar la relevancia de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008. Se trata de la tercera declaración de principios y de política institucional de gran alcance adoptada por la OIT desde la propia promulgación de Constitución en 1919. Dicha declaración es efectivamente un hito histórico desde la propia Declaración de Filadelfia de 1944, así como desde la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998. La Declaración de 2008 contempla un importante objetivo de promover el trabajo decente para todos, insistiendo en la necesidad de asegurar las metas establecidas en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo. Ello implica la necesidad de adoptar medidas que aseguren el trabajo digno mediante la promoción y la protección efectiva de los derechos humanos, favorecer la libertad de trabajo y la abolición efectiva de cualquier manifestación de trabajo infantil. Se debe asegurar, pues, el disfrute de un trabajo exento de abusos y en el que se disfrute de las condiciones de empleo equitativas y justas, que aseguren condiciones de vida decentes, con una adecuada cobertura de protección social.

5. Trabajo digno como derecho humano y como objetivo de desarrollo sostenible

El derecho humano al trabajo forma parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos objetivos ambiciosos se adoptaron pensando en el período 2000 a 2015, marcando la actuación de Naciones Unidas y de la propia OIT. Con todo, dicha estrategia sigue actualmente vigente y los programas de actuación observan esta Declaración



internacional como un auténtico referente. Precisamente después de la Declaración de la OIT relativa los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998 se anunciaba ya la necesidad de alcanzar en 1999 el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Este programa se gestó con la referencia institucional a *UN Global Compact*. Sin duda, la Declaración de 1998 fue importantísima y se presentaba como fundamento esencial para el propio desarrollo de la estrategia de defensa del trabajo decente. El Pacto Mundial se configuró especialmente marcado por la tendencia a las propuestas en el ámbito de la responsabilidad social empresarial, a las que se adscriben voluntariamente las empresas. Sin duda, estamos ante una iniciativa sumamente novedosa, que ha tenido resultados positivos. Ello lo demuestra el importante número de empresas voluntariamente adscritas al programa. En cualquier caso, destaca la defensa de los derechos humanos en materia laboral, respetando igualmente el medioambiente y combatiendo decididamente la corrupción en el ámbito público y privado. Por tanto, en el ámbito laboral se produce un interesante desarrollo de los derechos fundamentales contemplados en la Declaración de la OIT de 1998.

Con todo, conviene indicar que el concepto de trabajo decente no se delimita en la estratégica Declaración del Milenio. Ciertamente, se trata de una noción que se presume en su contenido, sin que se desarrolle adecuadamente en los objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos objetivos fueron acordados por los jefes de Estado y de gobierno, reunidos en la ONU, en Nueva York, el 8 de septiembre de 2000. Los objetivos esenciales son eliminar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años, mejorar la salud materna, combatir el VIH / SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y, finalmente, fomentar una alianza mundial para el desarrollo.

6. La necesaria atención a la pobreza desde el fomento de los derechos humanos

De igual modo, el desarrollo del trabajo decente, como manifestación del derecho humano al trabajo, tiene una conexión importante con la supresión de la pobreza. Hablar de trabajo decente supone referirnos a la necesidad de erradicar las formas extremas de pobreza y la reducción de las cuotas de pobreza extendidas en virtud de la nueva noción de los trabajadores pobres. Ello está relacionado con la necesidad de poner fin a todas



las formas de discriminación en el empleo, en las condiciones de trabajo y, por extensión, en la sociedad. Con ello se asegura una mayor proyección de la cohesión social. En este sentido, debemos apuntar la importante Resolución 63/230 de la Asamblea General, que teniendo en cuenta el mandato de Naciones Unidas, aprobó el 19 de diciembre de 2008 un importante programa de lucha contra la pobreza. Nos estamos refiriendo al Segundo Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza, cuyo desarrollo se extendió desde 2008 a 2017. En este programa se hacía una alusión expresa al pleno empleo y al trabajo decente para todos. De igual modo, y en conexión con esta línea de protección tenemos la Agenda 2030, que contempla diecisiete objetivos ambiciosos de lucha contra la pobreza. El objetivo es poner fin a todas las formas de pobreza que existen en el mundo, poner fin al hambre y garantizar una vida sana en el ámbito del fomento del bienestar para todas las edades. De igual modo, se insiste en la necesidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades para todos, lo cual es esencial en el ámbito del acceso al empleo, así como conseguir la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres en el ámbito laboral.

Sin duda, es esencial la promoción de condiciones de desarrollo económico, buscando un crecimiento de la economía sostenido, inclusivo y sostenible, orientado al pleno y productivo empleo para todos. Hablamos de un empleo pleno, que está en justa sintonía con la necesidad de un empleo de calidad y digno. El trabajo decente debe desarrollarse necesariamente en un contexto de crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, sin que pueda desarrollarse al margen de dichas circunstancias idóneas de protección laboral. Se sigue, pues, mostrando un especial compromiso por la lucha contra la pobreza en todo el mundo, combatiendo las desigualdades dentro de los países y entre ellos. No cabe duda de que se trata de un objetivo sumamente ambicioso, que es clave para alcanzar sociedades pacíficas, justas e inclusivas. En este sentido, dicho objetivo no puede desarrollarse sin la protección firme y efectiva de los derechos humanos y la defensa de la igualdad.

En este sentido, la propia Agenda 2030 de la OIT, relativa al trabajo decente, se presenta como un programa de actuación permanente ya en el tiempo. Ello no solamente supone un importante ámbito de desarrollo conceptual, sino también ofrece una visión de la acción y cooperación de la OIT con los Estados. Se trata de un compromiso que es



la culminación del reconocimiento desde el punto de vista internacional del principio del trabajo decente. Efectivamente, la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008 supone el reconocimiento internacional del trabajo decente al máximo nivel en el seno de la OIT. Dicho compromiso internacional se ha visto impulsado y reforzado por la Agenda 2030, que implica reconocer el trabajo decente al máximo nivel dentro del sistema de Naciones Unidas. Dicho compromiso de la Agenda 2030 es sumamente ambicioso y habrá que evaluar el compromiso de su cumplimiento progresivo. Precisamente, ello es sumamente importante actualmente, en un tiempo marcado especialmente por la incertidumbre. Estamos ante una circunstancia sumamente compleja, que quizá no permita cumplir suficientemente sus objetivos. En este sentido, conviene señalar que la Agenda 2030 hace referencia a problemas clásicos y a las estructuras del trabajo, que muchos de ellos no tienen una resolución fácil.